



MONCLOA TEME QUE ALMARAZ ARRUINE SU PROMESA DE UN CIERRE NUCLEAR EN 2035

El Gobierno recela de validar la prórroga hasta 2030 tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear para no alentar una ola de peticiones de otras centrales que desactive su compromiso de echar el cierre a esa fuente de energía

José María Camarero
Madrid



El Gobierno se expone a un efecto dominó con las centrales nucleares si autorizase definitivamente la prórroga de la vida útil de la planta de Almaraz (Cáceres), la primera que se enfrenta al calendario de cierres diseñado en su día por Transición Ecológica. El Ejecutivo teme que una hipotética prórroga derive en un escenario en el que el resto de instalaciones se sumen a reclamar esa extensión a medida que se vayan cumpliendo sus plazos. Si así ocurriese, el ministerio se expone a que la nuclear siga activa en España mucho más allá de 2035, superando las previsiones establecidas en su plan estratégico hasta 2030, el año en el que está asentado el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en vigor.

Esta es una de las grandes dudas que se plantean los responsables estatales antes de tomar una decisión definitiva sobre la planta extremeña, para la que tendrá dos meses una vez se conozca el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre su futuro. Si este organismo avala la prolongación de la vida de Almaraz, como todo parece indicar y anticipó ABC, la central podría permanecer activa al menos hasta 2030, parcheando un primer asalto con el que el Gobierno no se siente cómodo a la hora de autorizar la extensión. Sería «un mal menor», apuntan diversas fuentes vinculadas a la decisión gubernamental.

El problema llegaría, indican esas mismas fuentes, si se generase un más que probable contagio al resto de plantas que esperan la resolución de Almaraz para saber cómo actuar. Los pro-

pietarios de Ascó I y II y Vandellós (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara) –las tres, en manos de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, en distintas proporciones– tendrían un argumento para sumarse a la ola de peticiones para prorrogar su actividad. Y ese contexto implicaría que la última nuclear con actividad se iría mucho más allá de 2035, el año en el que el actual acuerdo entre Gobierno y compañías había fijado el fin de la energía atómica en España.

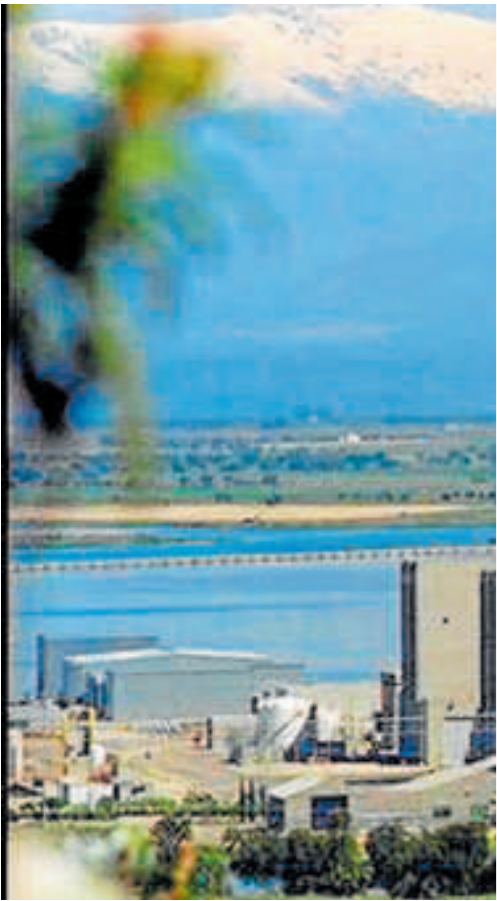
Si la decisión de prolongación de vida útil en manos de Transición Ecológica se circunscribiera a Almaraz –con los dos reactores más potentes del sistema eléctrico peninsular–, permitiría al Gobierno salvar una bola de partido, sin tener que preocuparse por el suministro del sistema; con más margen para seguir instalando renovables y capacidad de almacenamiento durante los tres años de esa medida excepcional, y sobre todo sin resquebrajar las costuras del PNIEC, uno de los compromisos más férreos que mantiene el Ejecutivo en materia energética. Pero si el ejemplo de Almaraz desencadena una ola de peticiones posterior, se daría paso a mantener abiertas más allá de 2035 otras centrales y el fin nu-

clear no llegaría, como mínimo hasta más cerca de 2040 que de los compromisos del Ejecutivo.

Las grandes energéticas implicadas en esta solicitud esperan la primera decisión, que puede suponer un punto de partida para el resto de instalaciones. Con sus tiempos, con sus procesos y con sus singularidades: cada una tiene una potencia, se encuentran en ubicaciones estratégicas, mantienen intereses político-económicos diferentes y disponen de un peso accionarial heterogéneo. A pesar de este abanico de intereses, los propietarios de las nucleares se han mantenido a favor de prolongar su vida. Eso sí, siempre que las condiciones financieras lo permitan. Esto es, insistiendo en la necesidad de rebajar impuestos y otras cargas.

Calendario burocrático

El primer paso de todo este calendario burocrático lo tiene que dar el CSN. Aunque todo apunta a que el organismo avalará que Almaraz siga técnicamente funcionando más allá de 2027, la fecha en la que estaba previsto el cierre de uno de sus dos primeros reactores. Antes de finales de este mes se conocerá el in-



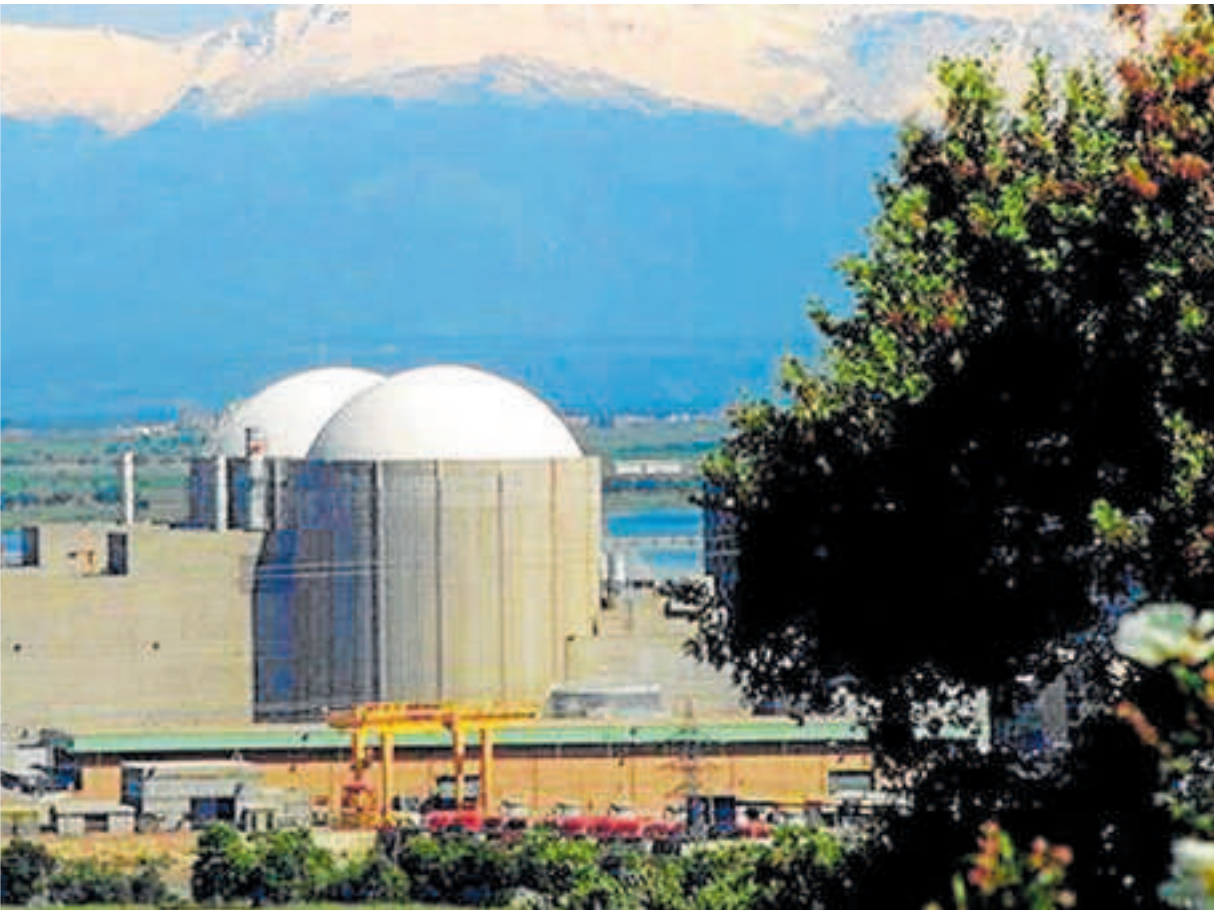
forme sobre el estado de la central cácerseña. El departamento dirigido por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, se mantiene en sus trece: esperan el dictamen del CSN «sin más valoraciones que puedan interpretarse como una interferencia a su labor».

No obstante la capacidad de influir solo será ejecutada en caso de que sea negativo, es decir, que el supervisor nuclear considere que técnicamente no pueda seguir operando. En tal caso, se deberá aplicar el calendario de cierre pactado, y en 2027 se desactivaría uno

APORTACIÓN NUCLEAR

20%

El conjunto de plantas nucleares inyectan una quinta parte de las necesidades de consumo de luz cada año, con estabilidad en su producción a lo largo del ejercicio.



Exterior de la Central Nuclear de Almaraz, en Cáceres.ABC

de sus reactores. Pero si hay un aval del CSN, el Gobierno puede decidir cerrarla. La decisión definitiva de Moncloa no llegará inmediatamente después del informe del Consejo. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confirmó esta semana que, una vez el organismo emita su juicio, el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez se tomará un plazo de dos meses para adoptar una decisión sobre la solicitud de prórroga durante tres años más de lo previsto.

Cuanto más tiempo pase, Sánchez

puede enfrentarse al mismo dilema electoral que tuvo en las pasadas elecciones autonómicas extremeñas. Cita electoral en la que el futuro de Almaraz pesó en buena parte de las localidades afectadas. Ante unas generales, el núcleo de Tarragona es el especialmente sensible a esta realidad energética. Ya que, los partidos independentistas han reclamado que Ascó siga activa, otra patata caliente sobre la que el Ejecutivo tendría que pronunciarse con el bagaje de lo que haya hecho en primer término en Almaraz.